

## PRECIO DE SUSCRICION

	MES.	TRIMESTRE.
En Madrid.....	4 rs.	12 rs.
En provincias.....	5 »	15 »
Por correspondencia.....	6 »	18 »
En el extranjero.....	30 »	90 »
En Portugal.....	36 »	108 »
En Ultramar.....	60 »	180 »

Comunicados 2, 5 y 10 reales línea.  
Anuncios a 4 real línea: a los suscritores mitad de precio.  
En París para suscripciones y anuncios C. A. Saavedra,  
rue Talbot, 55.

## EL POPULAR

DIARIO INDEPENDIENTE

PROPIETARIO DON VICTOR GARCIA

## OBSERVACIONES

EL POPULAR no se publica los días festivos.

La Redacción y Administración, calle del Prado, número 45, piso bajo derecha.

No se responde de las cartas que contengan sellos y no vengan certificadas.

La mano de periódico de 25 ejemplares a 3 reales 50 céntimos.

No se sirve suscripción que no acompañe su importe.

Terminada esta, sin haberla renovado, dejaremos de remitir el periódico, pero avisaremos con anticipación.

Los que tengan necesidad de tratar de asuntos económicos con esta empresa y la correspondencia toda se dirigirá a D. MIGUEL P. GARCIA.

Los asuntos todos concernientes a la parte literaria se dirigirán a su director literario D. ANTONIO RODRIGUEZ PANIAGUA.

## EL DERECHO ANTE LA REVOLUCION.

## SECCION SEGUNDA

## VIII.

Necesidad de procurar la mayor economía posible en los jueces.

## PARTE PRIMERA.

La necesidad de encaminar la reforma del procedimiento judicial hacia el logro de la mayor economía posible, ha sido tan sentida en todos tiempos, que la ley de Cortes de 13 de Mayo de 1855 la impuso como una de las bases a que debió ajustarse la comisión para redactar la ley de Enjuiciamiento civil.

Este deseo tan explícitamente consignado en un documento legislativo de esta naturaleza nos conduce, naturalmente, a tratar una cuestión, cada día más importante, y sobre la cual han estado muy divididos los escritores sobre teoría y práctica forense; a saber, sobre la administración de justicia debiera ser gratuita, es decir, si la justicia debería administrarse gratuitamente.

La Administración de justicia más que un poder político, es un orden, un ramo de la Gobernación del Estado, es la más alta de las instituciones sociales, y el ejercicio de ella, es más que un derecho del Poder supremo, un deber que pesa sobre él de una manera inescusable; deber sin el cual dejaría de existir ese Poder y con él la sociedad misma; deber que es preciso cumplir; para que se mantenga el orden, así en el individuo, como en la familia, como en la propiedad; y si la Administración de justicia es una función del Poder supremo, no puede dejar de ser una carga general del Estado, bajo cuyo concepto es indudable que el ideal de esta función es que la justicia debe ser administrada a todos los ciudadanos, indistintamente, que la necesitan, de una manera gratuita, con cargo, su mantenimiento, al presupuesto general del mismo Estado.

En buenos principios es, pues, esta la única opinión admisible, y si no ha prevalecido, hasta ahora, en la práctica, es pura y simplemente por que la penuria del Tesoro que, en España, por las causas expuestas en la primer serie, es el estado normal, nunca ha permitido otra cosa.

En esta imposibilidad de establecer y ordenar las instituciones sociales con arreglo a los verdaderos principios, ha debido someterse el legislador a la imperiosa ley de la necesidad; y en este estado no han faltado escritores que, destituidos del ideal filosófico, más se han dedicado a la coonestación del hecho existente, que a la investigación de la verdad. Para estos escritores importa poco el que la sociedad, en punto a Administración de justicia, se encuentre fuera de su quicio; estos escritores dejan hacer, y dejan pasar las cosas como están, se creen dispensados de tomar parte alguna en el movimiento reformista que caracteriza a nuestra época, y creen que, con sentar el principio vago y empírico de que

los servicios del Estado han de ir a cargo de los que más necesidad tienen de ellos, la ciencia, ya ha dicho, sobre el particular, la última palabra.

Con esta manera de arreglar las cuestiones las comarcas invadidas por el azote de la guerra, serían las únicas que debieran costear los ejércitos permanentes, y las carreteras y las subvenciones para ferrocarriles y demás obras públicas solo irían a cargo de los pueblos por donde pasan estas vías de comunicación. Enhorabuena que el servicio de correos y de telégrafos, en la parte que miran al interés privado de cada individuo o de cada familia, o de cada establecimiento industrial o mercantil, contribuya a su sostenimiento con la retribución impuesta por los reglamentos a cada uno de los que le necesitan y a proporción de la utilidad que les reporta, pero, en los otros servicios que afectan directamente al orden público, y por ende, a la subsistencia de la misma sociedad, a esta, y en su representación, a los poderes supremos del Estado, es a quien toca sostenerlos exclusivamente.

Cosa de veinticinco años atrás, en los juzgados de primera instancia, así del fuero común como de las jurisdicciones especiales, los asesores y los fiscales cobraban sus derechos directamente de las partes litigantes, y todos los actos judiciales, cualquiera que fuese el interés de que en ellos se tratara, se sustentaban en papel del sello cuarto, que importaba cuarenta maravedises por hoja.

La inconveniencia de ese sistema que solo se sostenía por una necesidad del Tesoro, era universalmente reconocida, y en prueba de ello que tan luego como el sistema representativo en lo político, obtuvo alguna estabilidad, se procuró hacer cesar un estado de cosas vergonzosas en que parecía que la justicia se había de comprar al por menor, y se puso a sueldo a los jueces y promotores, tratándose de indemnizar, hasta cierto punto, al Tesoro del gasto que iba a causarle esta nueva atención con un aumento que recibió la renta del papel sellado. Entonces se creó un sello judicial, con cierta escala en su precio para que pudiera ampliarse con proporcionalidad a todas las cuantías.

La reforma que entonces se llevó a cabo en este sentido y con algunas modificaciones ha llegado a nuestros días, fué ya un paso considerable hacia adelante, y estaba en la conciencia de todos que, a no tardar, se iban a poner a sueldo los escribanos actuarios, para acabar de completar la reforma hasta dejar cumplimentado en todas sus partes el principio de que la Administración de justicia ha de correr por completo a cargo del Estado, lo cual no se opone a que, por medios indirectos se consiga que, mientras la penuria del Tesoro no consienta el planteamiento de ese principio, ayuden los mismos litigantes, algún tanto, a costearla, a medida

en proporción de la utilidad que reciben, como sucede con otros servicios, porque a las reformas no se puede ir de un salto; es necesario, hasta cierto punto, ir contemporizando, mientras se espera la oportunidad de las circunstancias favorables para realizar el cambio reclamado por la ciencia y la experiencia. Pero, lo repetimos, esto no es el ideal.

Así como el hombre que agoviado por las infinitas contrariedades de la vida busca el amparo de la justicia divina, le basta acercarse al templo o implorarla, así debe bastarle al ciudadano que necesita defender su derecho, acercarse a los tribunales, que son los templos de la justicia social, para que ésta le proteja y le consuele.

A este ideal llegaremos algún día. En el entretanto, démonos por satisfechos con adelantar, siquiera un paso, en el camino de la emancipación del poder de las prácticas abusivas.

El origen de ellas, el grande escollo en que se estrellan los laudables propósitos del legislador para extirparlas es un hecho al cual no se ha dado hasta ahora la importancia que se merece.

Este hecho es la arbitrariedad que reina entre los auxiliares de la Administración de justicia en la regulación de sus retribuciones; y a la desaparición de esa arbitrariedad debe consagrar la ley toda su fuerza, y toda su energía si quiere conseguir resultados efectivos; para lo cual hay que partir de principios más justos que los que rigen hoy día y sobre todo, más favorables a los intereses generales de la sociedad, principios que sin impedir la competente retribución a todos los funcionarios que se ocupan en ese ramo, en proporción a sus respectivos trabajos, excluyan esa arbitrariedad a que nos venimos refiriendo, a la sombra de la cual tiene cabida, muy a menudo, una explotación vergonzosa que suele traer consigo el trastorno, cuando no la ruina de las familias.

Ha de ser un principio, absoluto y sin excepción alguna, que toda persona de cualquier clase o condición que sea que, por sus trabajos en los asuntos judiciales, haya de percibir derechos u honorarios, de las partes interesadas en ellos, los exija con arreglo a un arancel previamente establecido.

Debe declararse inabonable toda partida que no exprese determinadamente el trabajo o los trabajos concretos a que se refiere con citación de la fecha de su ejecución y demás circunstancias para que el que ha de pagarla pueda comprobar su exactitud, y del número del arancel que a cada acto se haya aplicado.

También debe declararse inabonable todo trabajo hecho por escrito, al pie del cual no se continúe en letra bien inteligible, la cantidad en que lo gradúa su autor, y el número del arancel que haya tenido a la

petuamente desterrada la perniciosísima práctica de omitir esta expresión, con la fórmula, que a tantas vejaciones se presta de decir honorarios, a la libreta.

Prohibición absoluta de que las tasaciones de costas las haga, en ningún caso, el mismo funcionario que las devenga. Esta tarea convendría que corriese a cargo del ministerio fiscal, puesto que sobre ser poco frecuentes las reclamaciones de los interesados, con ese sistema de claridad y publicidad que proponemos, habría de ser, también, una operación sumamente fácil, la de tasar las cuentas devengadas.

Declaración explícita de que carece de fuerza ejecutiva toda cuenta de derechos u honorarios devengados en juicio, mientras no haya pasado por la tasación.

Y abono de multas en el papel de pagos correspondiente, por todo funcionario que, en la regulación de sus derechos infringiese o dejase de observar el arancel establecido para los de su clase, proporcionadas a la entidad de la infracción, y señaladas por el mismo tasador al pie de su censura.

De esta manera ya se podría litigar sin temor de gastar más de lo que se disputa; de esta manera dejarían los pleitos de ser el espanto y la ruina de las familias; con tales precauciones dejarían de ser posibles los abusos que han conculcado contra la curia tantas antipatías, y renacería en esas profesiones útiles y honrosas, cuando se desempeñan decorosamente, la confianza a que pronto se harían acreedoras.

ANTONIO BOADA.

(Se continuará.)

Prestando toda la atención que merece el ofrecimiento de las clases masivas para servir al Estado con notables economías de que dimos cuenta a nuestros lectores el 28 del pasado Marzo, sabemos que la exposición presentada con dicho objeto, pasó de la Presidencia del Gabinete al ministerio de Hacienda como necesario trámite, tratándose de intereses públicos.

Es de esperar que en dicho ministerio obren con la misma actividad que lo ha hecho la Presidencia, pues nadie más interesado en todo lo que economice gastos, que el Centro que tiene a su especial cuidado, tantas y tan extraordinarias atenciones, puede apreciar en todo su valor el que encierra dicho ofrecimiento.

En contestación a los interesados que desean conocer el número de los que se adhieren a este acto, aprovechamos esta ocasión para decirles que la comisión interina está en la calle de la Montera, número 40, cuarto 2.º

Vamos a presentar un hecho del que apenas habrá ejemplos que le igualen, y el cual explica al mismo tiempo, una serie de infortunios ocurridos en breves momentos a un benemérito oficial de la guardia civil. El suceso que vamos a referir, ha sucedido en Ríza, y de cuya

autenticidad nos responden personas de entero crédito.

Parece que el jefe del destacamento de dicho punto, tuvo uno de estos días la desgracia de perder a su esposa; abrumado por el dolor de una pérdida tan irreparable, y al poco tiempo de espirar aquella, recibe una carta en donde se le participa que un hijo suyo, oficial del ejército, había sido gravemente herido en el Norte; lo cual aumenta las angustias del desgraciado padre; pero coincide con estos dos sucesos, el que recibe en aquel instante una orden para que inmediatamente salga con el destacamento a llenar un servicio de importancia; de modo, que colocado entre el deber militar y el sentimiento de padre y esposo, tuvo que abandonarlo todo y cumplimentar la orden de sus superiores, abandonando el cadáver de su esposa, y a cuatro o cinco hijos de menor edad.

Por fortuna, apercibidos los vecinos de Ríza de aquella serie de lamentables acontecimientos, decidieron dar sepultura y hacer honrosos funerales por la difunta, tomando bajo su amparo a los niños abandonados, hasta tanto que regresase el desgraciado jefe, que, por no faltar a su deber, tuvo que olvidarlo todo en tan críticos instantes. Si triste es el desenlace de este drama individual, digna es de aplauso la noble conducta del vecindario de Ríza.

Muchos periódicos dicen que ha quedado terminada la combinación de varias traslaciones de prelados, que muy en breve ha de hacerse por el ministerio de Gracia y Justicia, y que los prelados que van a ser removidos, son: Ubeda, Jaén, Córdoba y algún otro que no recordamos.

Con perdón de nuestros colegas, diremos que en la anterior noticia hay desatinos de a folio. ¿Cómo puede remover el ministro de Gracia y Justicia al prelado de Ubeda, cuando Ubeda no ha tenido jamás obispo ni silla episcopal siquiera? ¿Cómo puede remover al prelado de Córdoba cuando hace muy pocos días bajó al sepulcro el Sr. Alburquerque con sumo sentimiento de sus diócesanos? Creemos que hay un error, y error deplorable, en la anterior noticia.

Ya no existe la célebre tregua del silencio. Prendida con alfileres desde el primer día, ha caído a nuestro modo de ver, para no levantarse más. Constitucionales y radicales reverdecen sus antiguos odios con inusitada pujanza, y no sabemos como se va a recoser de nuevo el roto manto que cubría a los conciliadores del 3 de Enero. La llegada del señor Topete, llegada maliciosamente negada por el Gobierno, puede ser la soldadura de la mal llamada tregua, pero aunque conocemos la terquedad del ministro de Marina, trabajo le encomendamos, si ha de traer al redil a tanta oveja descarriada.











